



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Demandante: MÓNICA LILIANA GARRO ARIAS
Demandado: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU y MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Radicado: 05001 31 05 010 2012 00631 02
Decisión: A-329

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante, en contra del auto proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el día 5 de agosto de 2021 mediante el cual se liquidaron y aprobaron las costas y agencias en derecho.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante auto escrito, aprobado previamente por los integrantes de la Sala.

A N T E C E D E N T E S :

Mediante auto del 5 de agosto de 2021, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín efectuó la liquidación de las costas en el proceso de la referencia, tasándolas de la siguiente manera: i) en la suma de \$9'085.260 por concepto de agencias en derecho en primera instancia; y ii) en la suma de \$8'480.000 por concepto de

agencias en derecho impuestas por la Corte Suprema de Justicia en el trámite del recurso de casación. En ambos casos a cargo de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA y a favor de la demandante.

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la señora MÓNICA LILIANA interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, indicando que la tasación de las costas no se hizo teniendo en cuenta el valor de las condenas que se impusieron y que suman un total de \$276'849.467, a la cual se le debe aplicar un monto de hasta 25% que corresponde a \$69'212.366.

El Juez de Primera Instancia mantuvo su decisión y concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Dentro del término concedido en esta instancia, ninguno de los apoderados presentó alegatos de conclusión.

C O N S I D E R A C I O N E S :

En principio conviene puntualizar que desde el contenido del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y la reforma introducida por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que modificó los numerales 1º y 2º del referido artículo, y actualmente con lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso, las costas procesales corren a cargo de la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.

En este orden y como reglas a tener en cuenta al momento de tasar las costas procesales en esta oportunidad, debe aplicarse el artículo tercero del Acuerdo N° 1887 de 2003, *"Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho"* expedido por la Sala Administrativa

del Consejo Superior de la Judicatura, que establece como criterio a tener en cuenta por el funcionario judicial:

“ARTICULO TERCERO.- *Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. (...)*”

Aclarado lo anterior, basta con indicar que la norma aplicable al caso dispone que para determinar los valores concretos que deberán pagarse por agencias en derecho, se tendrá en cuenta, que, en los procesos ordinarios laborales de primera instancia, el tope máximo está dado **hasta** en el 25% del valor de las pretensiones reconocidas, incrementado en cuatro (4) SMLMV si además se impone una obligación de hacer, o si se reconocen prestaciones periódicas, hasta en veinte (20) SMLMV.

Consecuente con lo anterior, al momento de la fijación de las agencias en derecho en el caso concreto, es preciso tener en cuenta varias situaciones como las siguientes: **i)** la naturaleza, de relativa complejidad del debate jurídico que se planteó en el presente proceso, esto es, la existencia de una relación laboral, junto con el pago de salarios, prestaciones sociales y vacaciones derivados del reintegro por el despido efectuado en el periodo de licencia de maternidad -; **ii)** la duración del proceso, por cuanto transcurrieron más de ocho (8) años para su resolución, ya que la demanda fue radicada el 14 de mayo de 2012 y la sentencia de fondo proferida el 7 de julio de 2020; y **iii)** la calidad de la actuación del profesional del derecho, quien impulsó las etapas previas, participó en las audiencias públicas en la primera instancia e interpuso los recursos correspondientes, llevando al reconocimiento de la mayoría de las pretensiones de la demanda.

Atendiendo a las anteriores situaciones, efectivamente la suma de \$9'085.260 que dispuso el juez como agencias en derecho en primera instancia se queda corta con respecto a las pretensiones reconocidas al demandante. Nótese que en el fallo se ordenó un reintegro desde el 17 de junio de 2011 con el pago de salarios, prestaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social hasta que se haga efectivo, así como el pago de salario, prestaciones, vacaciones reembolso por pagos a seguridad social entre el 5 de octubre de 2008 y el 30 de abril de 2011, más una indemnización parcial por haber sido despedida en periodo de lactancia.

Ahora, no se puede desconocer que la solicitud que presenta la recurrente tampoco puede ser de recibo en la medida que pretende un cálculo aplicando el porcentaje máximo establecido en el acuerdo que regula la materia, más aún cuando otras pretensiones como el reembolso de los dineros retenidos por concepto de rete fuente, la prima de servicios o la indemnización completa que se pretendía por el despido en período de lactancia, no fueron reconocidas.

Además, como se ha explicado en reiteradas oportunidades, el porcentaje de 25% allí establecido, así como la suma equivalente a 20 SMLMV cuando la condena incluya una prestación periódica, o de 4 cuando se trate de una obligación de hacer, corresponden al límite máximo que en cada uno de los casos puede aplicar el operador, sin que ese porcentaje o valor sea de obligatorio cumplimiento, más aún, se reitera, cuando para cada caso se debe tener en cuenta la naturaleza del proceso, las órdenes impartidas y la actividad desplegada por el profesional del derecho.

Adicionalmente, el propio acuerdo 1883 de 2003 es claro en establecer que los porcentajes allí establecidos se deben aplicar *inversamente al valor de las pretensiones*, lo que significa que ante una condena cuantiosa lo prudente es aplicar un porcentaje inferior.

De ésta manera, estima la Sala procedente, teniendo en cuenta las circunstancias propias del proceso, fijar el valor de las agencias en derecho para el trámite de la primera instancia, en la suma de \$15´000.000. A éste valor se le debe sumar lo establecido como agencias en derecho en segunda instancia, lo cual se mantiene tal y como se definió en su momento, para un total de \$23´480.000.

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser modificada.

Sin costas en esta instancia.

D E C I S I Ó N:

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **MODIFICA** el auto del 5 de agosto de 2021 proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar fijar como agencias en derecho en primera instancia, la suma de **\$15´000.000**, que serán a cargo de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA y a favor de la demandante.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N°227
del 16 de diciembre de 2022

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez

Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f173edf4188f8d52d6d7bc3f46c78d8380682bc0aa8d484b6ddfd168100ca7a6**

Documento generado en 15/12/2022 12:00:15 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>